en la pena citada, la correspondiente al homicidio de Gallegos; y los devolvieron.

Almenara—Eguigúren—Leguía y Martínez—Washburn—Pérez.

Se publicó conforme á ley.

J. Gallagher y Canaval.

Cuaderno No. 261.—Año 1914.

La publicación delictuosa de un documento reservado, constituye un delito común.

Apelación interpuesta por el Ministerio Fiscal, en la causa que se sigue contra el conjuer doctor Rómulo Paredes y otros, por revelación de secretos.—Procede de Loreto.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. Señor:

El diario "El Oriente" de Iquitos, inserta una carta con el nombre al pié del doctor Rómulo Paredes, como se ve á fojas 1, en la cual informa que el señor Fiscal de la Iltma. Corte Su-

perior de Loreto—en una pieza del sumario originado por los crímenes del Putumayo —pide que se amplíe el enjuiciamiento contra el Cónsul inglés Roger Casement y se enjuicie, además, á los jueces, doctores Valcárcel y Herrera, así como también al dicho doctor Paredes que intervino como suplente en aquel ruidoso sumario cuyas primeras diligencias en la región fluvial le fueron encomendadas.

Por tal motivo, el mencionado personero de Ministerio Público imputa al doctor Paredes el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 190 del Código Penal, en la exposición de fojas 2; la cual á fojas 3, declara de plano, sin lugar, el auto traído al conocimiento de VE.

Fúndase la inhibición en que al Tribunal no compete el juzgamiento de los delitos de imprenta, cuyos procedimientos especiales prescribe la ley del 12 de noviembre de 1823.

No todos los hechos delictuosos para cuya perpretación se hace uso de lo prensa, son delitos de imprenta.

Solo tienen legalmente tal caracter los abusos de la libertad del pensamiento cuyo principio proclama la mencionada ley.

Esos abusos minuciosamente enumerados en el artículo 6.º y penados en el 16, consisten en la publicación de máximas ó doctrinas contra la religión católica, la Constitución de la República, las que incitan á la rebelión, á la sedición, al motín, las que injurian en libelos infamato-

rios que tachan la vida privada y mancillan la honra.

Tales son las producciones del pensamiento dañoso que la ley somete á los jueces de hecho para que, á mérito de sus teorías y afirmaciones, con solo su lectura, aprecien si ha ó no lugar á formación de causa.

La publicación de una pieza oficial, auténtica ó apócrifa, ó divulgación de lo que en ella se expresa, no se halla inclusa entre esos abusos punibles.

Si publicada hubieran aquellos jueces de examinar las máximas y doctrinas que contengan, sería aplicable la ley de imprenta.

Pero tal no es el caso. El delito está en la publicidad del documento, ó divulgación de su contenido; ó sea—no en las ideas trastornadoras ó malévolas de quien hace imprimir—sino en el hecho cuya apreciación no requiere examen de equidad, porque es efectivo, y también porque no basta por sí solo para acreditar que se encuentran satisfechos los previos requisitos indispensables de cuya prescindencia dependiere la delictuosidad.

Por no imponer castigo á tal publicación la ley de imprenta, si fuese ésta la que se aplicare, resultaría que á pesar de la pena que señala el Código Penal, el autor de la infracción delictuosa—en razón de haberla perpretado en un diario ó sea con máxima resonancia—quedaría impune.

Es innecesaria la última consideración para dejar de relieve el error de la inhibición.

Basta, en efecto, tomar en cuenta que la publicación de piezas sumariales no es delito privativo de imprenta, por cuanto, como está dicho, no figura entre los abusos concretados á teorías, injurias y calumnias que declara tales la ley pertinente; ni á ella debe sujetársele, porque no lleva in-vívitos todos los elementos que han de poseer las únicas confiadas al criterio de los jueces de hecho.

No siendo privativo el delito, si esa publicación lo entraña, se halla comprendido entre los de la regla general; lo mismo que el homicidio, el robo y otros en que tiene obligación de acusar el Ministerio Fiscal, cuyo juzgamiento procede de oficio cuando la autoridad judicial adquiere conocimiento de su perpetración, sea cual fuere, sin exceptuar la prensa, la fuente informativa ó el medio escogitado.

Luego, siendo reservadas las diligencias y piezas del sumario y constituyendo, en consecuencia, delito su publicación ó divulgación, conforme á lo resuelto en otros casos por VE., es obvio que al desestimar de plano la denuncia del señor Fiscal doctor Cavero, la Corte de Loreto no decidió con arreglo á derecho.

Revocando el auto inhibitorio, puede VE. mandar que se provea aquella denuncia como lo prescribe la ley.

Lima, á 3 de noviembre de 1914.

SEOANE.

RESOLUCIÓN SUPREMA

Lima, 13 de enero de 1915.

Autos y vistos; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal, cuyos fundamentos se reproducen: reformaron el auto apelado de fojas 3, su fecha 22 de junio último, que declara sin lugar la denuncia del señor Fiscal doctor Cavero: mandaron se provea la citada denuncia de fojas 2, como lo prescribe la ley; y los devolvieron.

Rúbricas de los señores: *Almenara, Eguigúren, Villa García, Barreto, Eráusquin.*

Gallagher y Canaval.

Apelación No. 30.—Año de 1914.